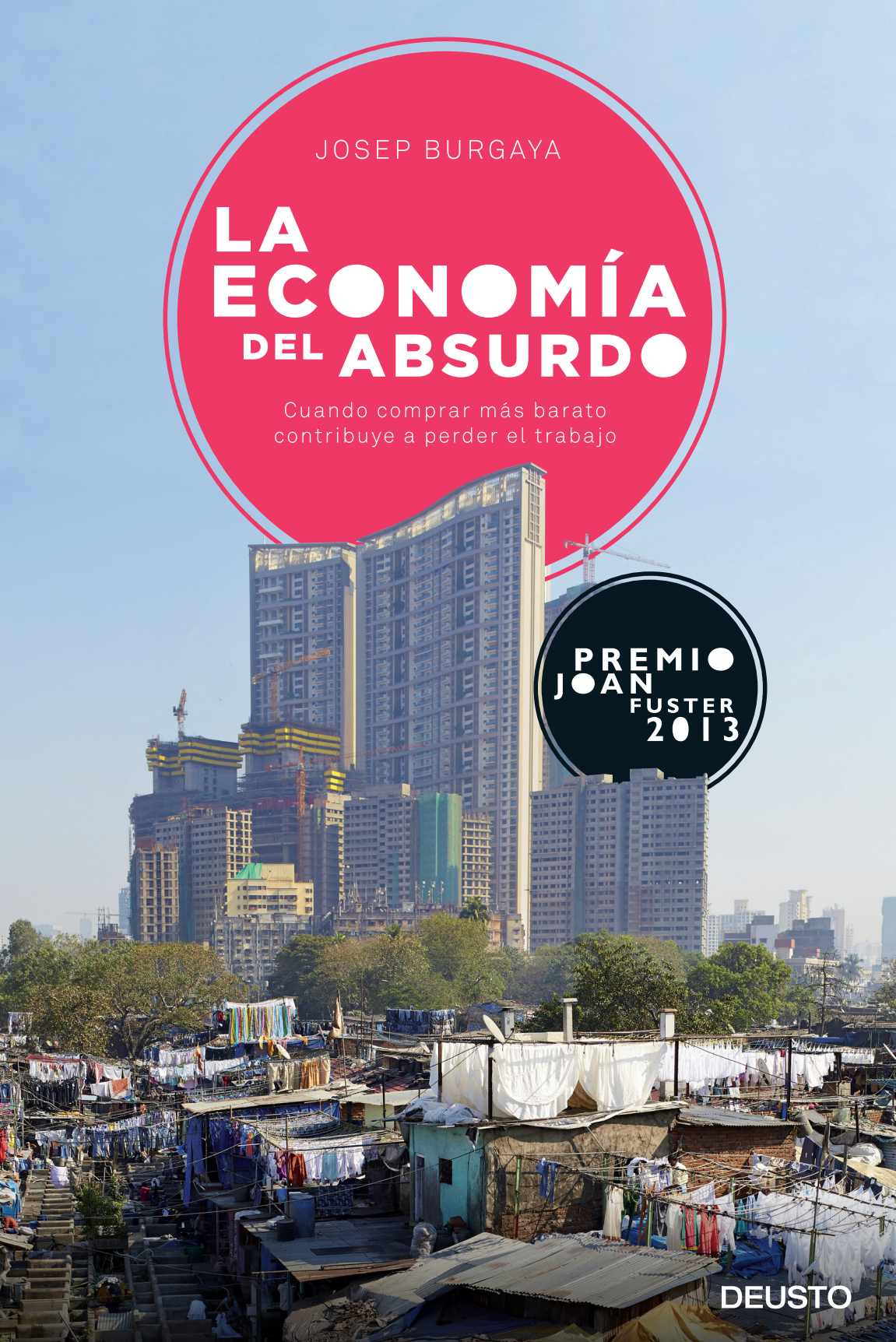
JOSEP BURGAYA

LA ECONOMÍA DEL ABSURDO

Cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo

PREMIO JOAN FUSTER 2013



DEUSTO

La economía del absurdo

Cuando comprar más barato contribuye a perder el trabajo

JOSEP BURGAYA

EDICIONES DEUSTO

© 2015 Josep Burgaya

© Centro Libros PAPF, S. L. U., 2015
Deusto es un sello editorial de Centro Libros PAPF, S. L. U.
Grupo Planeta
Av. Diagonal, 662-664
08034 Barcelona

www.planetadelibros.com

Diseño de cubierta: microbiogentleman.com
Imagen de cubierta: © Rudi Sebastian - Getty Images

ISBN: 978-84-234-2070-4
Depósito legal: B. 2.686-2015
Primera edición: marzo de 2015
Preimpresión: Medium
Impreso por Romanyà Valls, S. A.

Impreso en España - *Printed in Spain*

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Sumario

A modo de introducción: Economía y moralidad 13

1. **Se derrumba en Bangladesh el Rana Plaza. ¿Un cisne negro?** 17
2. **La magia de Apple se difumina en las factorías de Foxconn** 33
3. **El modelo de Zara revoluciona la producción y el consumo de ropa** 62
4. **Wal-Mart: el elevado coste de los bajos precios** 83
5. **La globalización de la economía: un proceso incontrolable y con múltiples disfunciones** 98
6. **El cuarto oscuro de la producción industrial en los países pobres y en los emergentes** 129
7. **El derrame en la pirámide ha resultado ser poco más que un goteo** 143
8. **Las fábricas vacías de los países industriales. ¡Qué paradoja!** 153
9. **El espejismo de convertirse en postindustrial** 174
10. **La apoteosis de las marcas** 189
11. **Un mundo de fantasía para los consumidores** 207
12. **La hegemonía de las corporaciones** 221
13. **Todo fuera de control: la disolución del poder político** 237

14. La era postideológica ha resultado ser muy ideológica 249
15. La crisis económica: una oportunidad ¿para quién? . . . 267

A manera de conclusión: Una economía del absurdo 279
Bibliografía 295

1

Se derrumba en Bangladesh el Rana Plaza. ¿Un cisne negro?

El miércoles 24 de abril de 2013, la vida cotidiana de la ciudad de Savar se vio sacudida por un ruido muy violento que podía inducir a pensar en un terremoto o en una explosión. Pronto, los ajetreados ciudadanos de esta ciudad suburbial cercana a Daca, que a las nueve de la mañana vive su punto álgido de actividad, se dieron cuenta de que lo que había sucedido era el derrumbe de un edificio industrial en el centro de la ciudad. No se puede decir que resultara exactamente una sorpresa. El día anterior, la fábrica había sido temporalmente desalojada por la aparición de unas amplísimas grietas, pero, ese miércoles, buena parte de los trabajadores habían sido conminados a volver al trabajo porque los pedidos de las marcas de ropa no podían esperar, y, por si acaso, el propietario del edificio les había mostrado los informes de unos ingenieros que afirmaban que no había ningún peligro de derrumbe y que el edificio aún estaría en pie al cabo de cien años. Las cosas no fueron exactamente así.

Los muy rudimentarios servicios de emergencia de la ciudad y los transeúntes comenzaron a sacar cuerpos de entre los escombros, muchos de ellos ya cadáveres; de aquella especie de colmena humana sólo había quedado en pie la planta baja. Hasta 8.000 trabajadores se amontonaban en los diversos talleres en los momentos más álgidos de los pedidos de las marcas.

Afortunadamente, debido a la crisis económica, aquella primavera de 2013 era relativamente tranquila, y, por lo común, en el edificio había sólo unos 5.000 trabajadores. Por suerte, ese día sólo estaban allí unas 3.800 personas, gracias a que algunos propietarios de talleres habían tenido la buena idea de no abrir, porque intuían que el tamaño de las grietas abiertas el día anterior no hacía presagiar nada bueno. Los que habían entrado a trabajar lo habían hecho de manera renuente y sólo les convenció de ello la amenaza de perder la paga y las cuadrillas que, con bastones en ristre, les conminaron a entrar. ¡Es lo que tiene la globalización!

El edificio derrumbado, conocido como «Rana Plaza», era una construcción grandiosa que albergaba cuatro fábricas textiles, alquiladas a diferentes fabricantes que, de manera independiente, trabajaban con subcontratas de confección para marcas de ropa occidentales suficientemente conocidas que buscaban en Bangladesh y otros países de la zona las oportunidades de unos costes laborales extremadamente bajos. Había también en el edificio numerosas tiendas y un banco, todo ello propiedad de Mohamed Sohel Rana, dirigente de las juventudes del partido gobernante, la Liga Awami, e hijo de un acaudalado terrateniente conocido y reconocido por sus actividades más bien oscuras; en la adquisición de tierras y solares, a menudo utilizaba la amenaza, y era un habitual de las prácticas mafiosas. Padre e hijo construyeron el edificio en 2006, tras intimidar a varios propietarios y haciendo uso de documentación notoriamente fraudulenta. Desobedeciendo la legislación urbanística de la ciudad, erigieron un edificio de cinco plantas que, tiempo después, fueron remontando hasta ocho, de manera ilegal y sin reforzar las estructuras del edificio. Las connivencias con los dirigentes del partido gubernamental lo hicieron posible. La debilidad y la mala calidad de una edificación que no estaba pensada para tanta gente y tanta maquinaria pesada, se vieron agravadas por la utilización de unos poderosos motores que hacían la función de generadores, a fin de superar los inconvenientes de los frecuentes cortes de fluido eléctrico que padece el país. Parece ser que fueron las sacudidas de una de estas máquinas en funcionamien-

to, la mañana del derrumbe, lo que convirtió las visibles grietas de la estructura del edificio en una trampa mortal que echó por tierra el castillo de naipes. La tragedia del Rana Plaza serviría para poner en el mapa la ciudad de Savar.

El municipio de Savar es una de las muchas ciudades que rodean la megalópolis de la capital bengalí, Daca. Administrativamente forma un subdistrito de la misma capital, situada en el noroeste de esta y a una distancia de unos veinticuatro kilómetros de su centro, con una densa población de alrededor de 1,4 millones de habitantes. Con un 80 por ciento de población de confesión musulmana, hasta hace poco era conocida por poca gente, a pesar de formar parte de las rutas turísticas del país. Savar cuenta con el monumento nacional a los mártires de la guerra de liberación de Bangladesh, el Jatiyo Smirti Soudha, que se erigió para conmemorar la guerra de la independencia bengalí de 1971, la cual les permitió erigirse en un país libre tras su secesión de Pakistán, después de nueve meses de guerra, atrocidades a gran escala, diez millones de refugiados y cerca de treinta millones de personas desplazadas. El Rana Plaza era un edificio cualquiera, de una ciudad cualquiera de las muchas que en esta zona de Asia se han convertido en el cuarto oscuro de la producción industrial masiva, con costes laborales irrisorios y con unas condiciones de vida y de trabajo que, si tuvieran visibilidad, harían entrar en crisis las ganas de comprar ropa de marca a los consumidores más compulsivos de las grandes superficies comerciales del mundo occidental, donde tan en boga está el concepto de «moda asequible». El Rana Plaza es uno de los numerosos edificios que en Bangladesh y otros países asiáticos albergan los muchísimos talleres donde la explotación laboral tiene poco que envidiar a las primeras fases de la revolución industrial británica y que los ingleses han bautizado como *sweatshops*, «talleres del sudor», donde los derechos y las condiciones laborales decentes son inexistentes. Nada que ver con el trabajo digno.

Aquella mañana de caos y de muerte en Savar, los trabajos para ayudar a escapar a los obreros asustados y heridos se hicieron a base de voluntarismo, y se dispuso de poca maquinaria adecuada para mover las toneladas de escombros en que

se había convertido el Rana Plaza. Durante las primeras horas salieron por su propio pie, o bien con la ayuda del improvisado servicio de emergencias, hasta 2.437 personas vivas del edificio caído. Pero, al tiempo que se rescataban personas con vida, también iban apareciendo numerosos cadáveres. Al principio todo parecía indicar que serían unos pocos cientos, pero, con el paso de las horas y los días, la tragedia aumentó, llegando a contabilizarse 1.138 cadáveres de trabajadores aplastados bajo los escombros. Los medios de comunicación occidentales siguieron la tragedia en directo y, durante los primeros días, le dieron el carácter de noticia destacada, a pesar de la poca tendencia a situar en un primer plano informativo las desgracias humanas producidas en países remotos y olvidados del tercer mundo. El tratamiento informativo que se le dio al suceso fue, en general, el propio de las catástrofes naturales, como si hubiera sido una tragedia desgraciada, lejana, ajena a nosotros y a la economía, y obviando el hecho de que la distribución internacional de la producción ha convertido este tipo de siniestralidad en un hecho bastante habitual. Fue presentado como un «cisne negro», uno de esos hechos imprevistos e improbables que, como casi siempre, se cernía sobre poblaciones acostumbradas a la desgracia y a la desdicha. A los pocos días del derrumbe, las imágenes del Rana Plaza habían quedado desplazadas en la parrilla de los informativos televisivos y en los periódicos, y el recuento final de víctimas merecía poco más que un breve. Escasos fueron los medios que aprovecharon para escrutar el qué y el porqué de la tragedia, para saber quién estaba detrás de un sistema de producción tan dado a provocar sufrimiento, quiénes eran esas personas sencillas afectadas, en qué condiciones trabajaban y, sobre todo, para quién se jugaban la salud y la vida en estos espacios insalubres e inseguros. A poquísimos periodistas y medios se les ocurrió explicar que la maldición de esta gente comenzaba en las tiendas de moda de Europa y Estados Unidos.

A los televidentes occidentales, anclados en una especie de inocencia propia de la adolescencia perpetua propia de los consumidores compulsivos, nos sorprendió darnos cuenta de que gran parte de los cadáveres del edificio de Savar eran mujeres

muy jóvenes y de que había un número importante de chiquillos. Esto nos incomodaba un poco. Los mismos que operan y especulan en esos países y conocen este mundo de la producción industrial en régimen de semiesclavitud y lejos de las miradas foráneas y del glamour de las marcas saben que las adolescentes constituyen los contingentes más importantes de esta masa trabajadora. Chicas muy jóvenes y niños que huyen de la miseria a que los condena el entorno agrícola y que encuentran en la explotación brutal de su capacidad de trabajo en estos talleres una manera de escapar —sólo aparentemente— de su situación penosa y aliviar a sus familias, o al menos dejar de ser una carga para ellas. Cobran cerca de treinta dólares al mes si tienen la suerte de trabajar para propietarios del primero o segundo de los eslabones de las cadenas de subcontratación, porque este es el salario mínimo establecido hace poco tiempo en el país; antes cobraban menos. Trabajan, en el mejor de los casos, seis días a la semana en turnos horarios indecentes que se adecuan a las necesidades de servicio de los pedidos. Cuando hay mucho trabajo y los clientes apremian con los plazos de entrega, los turnos de trabajo se llegan a solapar. La falta de contratos laborales y la libertad para despedir permiten pocos miramientos con horarios decentes y con exigencias de descanso. Son comunes los turnos de quince horas, en una especie de cubículos sin ventanas ni ventilación, donde la temperatura suele alcanzar fácilmente los 40 ºC. Fuera de la fábrica malviven en barrios de chabolas, mientras van perdiendo la adolescencia y la primera juventud. A los 25 años de edad se convierten en mano de obra poco «adecuada», ya que no interesan las mujeres con cargas de hijos y sus dedos van perdiendo agilidad para la costura. Las huelgas y la sindicación están prohibidas, no sea que alguien se metiera en camisas de once varas, y ni siquiera está permitido hablar durante las largas jornadas de trabajo. Paradójicamente, estas trabajadoras tienen la misma edad que las adolescentes occidentales a quienes las marcas dirigen sus campañas de marketing, consideradas compradoras de manada, que aseguran su éxito comercial. En Bangladesh, en cambio, no pueden ni soñar en comprar alguna pieza de las que producen. La situación estremeció incluso al papa Francisco, el

cual, el 1 de mayo de 2013, afirmó en una homilía: «Me impresionó un titular del día de la tragedia de Bangladesh: "Vivir con treintaiocho euros al mes". Esto es lo que pagaban a los que murieron... Eso se llama trabajo esclavo».

Como en las primeras fases de la ya lejana revolución industrial británica, el campo expulsa gente hacia la ciudad, donde se cree que hay oportunidades. El mundo rural está superpoblado en Bangladesh. Allí malviven cuatro quintas partes de una población pobre y malnutrida. La agricultura de subsistencia ha dado paso al predominio de grandes propietarios que han especializado sus cultivos en productos muy rentables destinados a la exportación y a las industrias de transformación. El país tiene el triste honor de encabezar el ranking de pobreza mundial, sólo superado por Haití, y su renta per cápita apenas llega a los seiscientos dólares por habitante y año. Desde que el empuje globalizador llevó a redistribuir la producción industrial hacia los países pobres mientras cerraban los centros fabriles occidentales, la exportación de productos textiles es la principal fuente de riqueza de Bangladesh. Más de tres millones de personas trabajan en este sector. La necesidad de la gente en un país tan pobre como superpoblado los lleva a trabajar a precios miserables y sin ningún tipo de costes ni prestaciones sociales. No hay derrame de riqueza en la pirámide, de arriba abajo, como argumentan los que sólo ven el vaso medio lleno en el proceso de mundialización económica, sencillamente porque los salarios están por debajo del umbral de subsistencia y porque las posibilidades de imponer su mejora a partir de la presión y la movilización son nulas. Los impuestos que pagan los industriales son ridículos y devienen inexistentes en las llamada zonas de procesamiento de exportaciones (ZPE), consideradas como reductos exteriores donde ni siquiera tienen vigencia las modestísimas legislaciones sociales y laborales del país. Cualquier pretensión de mejoras salariales o de las condiciones laborales por parte del partido gobernante o cualquier tolerancia de este respecto a huelgas o manifestaciones haría que los pedidos emigraran hacia otro país con más «orden social».

Los escombros del Rana Plaza pusieron en evidencia uno de los secretos mejor guardados del mundo de la subcontratación

de la producción en estos centros de vergüenza: para qué marcas occidentales trabajaban a precios que nos parecerían ridículos. Como explicó hace tiempo la periodista Naomi Klein respecto a la actitud hipócrita de unas marcas construidas sobre unos valores no respetados en su proceso productivo, convenientemente externalizado, mientras sólo se ocupan de las campañas de marketing, el contraste entre los consumidores a los que se dirigen y la producción en régimen de semiesclavitud requiere de dosis ingentes de secretismo. Los espacios de producción no tienen ninguna identificación, ni ningún detalle que les pueda relacionar con quienes producen, más allá de unas muy bien custodiadas etiquetas que, en algún momento, se habrán de coser en las prendas. Lo habitual es que las empresas occidentales ni siquiera traten de manera directa con los talleres. Existe la figura del contratista, generalmente un occidental con ambición, que se sabe mover y que conoce bien el país y cómo operar en él —lo que ahora se llamaría *un emprendedor*—, el cual busca los talleres donde realizar la producción a precios lo más competitivos posible. En muchas ocasiones, la manera de adjudicar los pedidos toma la forma estricta de subasta, a partir de la cual el industrial local puede subcontratar a otros talleres o incluso recurrir al trabajo realizado en el ámbito doméstico y en cualquier rincón del país. Como afirmó la oenegé Ropa Limpia, se demuestra que las auditorías y los códigos de conducta de las marcas son insuficientes. La llamada *responsabilidad social corporativa* (RSC), hace años que tiene un lugar destacado en las grandes compañías, pero es sólo una cuestión de marketing, un maquillaje. No se puede pretender a la vez obtener los precios más baratos posibles y al mismo tiempo exigir el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas.

Unas cuantas firmas muy reconocidas del sector textil quedaron retratadas con el derrumbe del Rana Plaza, aunque son muchísimas más —de hecho, la inmensa mayoría— las que subcontratan la producción en talleres similares y en condiciones por el estilo. Entre otros, en el complejo derrumbado se trabajaba para el grupo italiano Benetton, para la británica Primark, para la canadiense Loblaw, para C&A, para el gigante de la dis-

tribución Wal-Mart, para The Children's Place, así como por las españolas El Corte Inglés y Mango. En el caso de estas compañías españolas, su reacción fue bastante elocuente de como las marcas esconden sus vínculos con este sistema de trabajo esclavo. La mayoría de los medios de comunicación españoles obviaron mencionar la implicación de El Corte Inglés en el caso, como habitualmente hacen en relación con cualquier problema laboral que la compañía pueda tener en España. Parece que el peso publicitario de este gigante de la distribución disuade a la mayoría de medios de airearle ninguna noticia negativa. Mango, en cambio, adoptó la estrategia de negar que produjera en el Rana Plaza, aduciendo que si había etiquetas de su marca obedecía a que le estaban elaborando muestras para posibles pedidos, como si eso cambiara mucho la naturaleza de las cosas. Sabedores del coste en reputación que podía tener para la compañía que su marca quedara asociada a este desastre y a unas condiciones de producción tan poco presentables y tan inherentes a este sistema de fabricación, Mango se apresuró a enviar directivos a la zona para minimizar los «daños». Incluso fueron a fichar, ex profeso, a un antiguo directivo de RSC de Inditex, a fin de apagar el posible incendio de imagen de marca que esto podía acarrear, a base de contactar con las partes implicadas y asumir posibles reparaciones económicas. No deja de ser curioso y bastante elocuente que enviaran al responsable de responsabilidad social corporativa de la marca, poniendo en evidencia lo que ya es bastante sabido, que estos departamentos, en la mayoría de las empresas, son un mero elemento de marketing y comunicación y no un organismo de control y de exigencia interna.

Ante el escándalo de lo que sucedió en el Rana Plaza, y de las condiciones laborales evidenciadas, algunas de las marcas que se abastecen con este sistema emitieron anuncios genéricos de ayuda a las víctimas y de adopción de medidas para acentuar las exigencias laborales y de seguridad de sus proveedores. Esto es lo que les exigieron los sindicatos de Bangladesh y varias organizaciones no gubernamentales internacionales, como Ropa Limpia o el Consorcio de Derechos de los Trabajadores. La empresa Primark, desde su web, después de manifestar su conmoción y

presentar las condolencias a los afectados, aseguró que impulsaría una revisión sobre la integridad del edificio siniestrado, que evaluaría lo que había sucedido y daría su apoyo, todo a través de su «equipo de comercio ético». ¡Qué ironía! Bajo la presión de los hechos, muchas firmas del sector textil que operan habitualmente en estas condiciones se prestaron a firmar el Bangladesh Fire and Building Safety Agreement, un programa pactado con los sindicatos y las oenegés y destinado a mejorar la seguridad de las fábricas, minimizar los riesgos laborales, permitir inspecciones independientes y aceptar el papel de control de los sindicatos. Entre los firmantes, PVH Corpo (Tommy Hilfiger y Calvin Klein), H&M, Inditex, Marks&Spencer, Primark, El Corte Inglés, Mango, Carrefour, Benetton, etc. A pesar de que este documento era poco más que papel mojado y tener pocos efectos reales, algunas empresas relevantes, como la japonesa Fast Retailing, GAP o Wal-Mart, se negaron a firmarlo. Una manera como otra cualquiera de no admitir la situación real.

Las movilizaciones airadas de los trabajadores a raíz del siniestro tuvieron como respuesta una durísima represión por parte de los cuerpos policiales de un Estado extraordinariamente dispuesto a mantener el sector exportador del textil, prescindiendo de cualquier consideración social y laboral. Atiqul Islam, presidente de la poderosa patronal del textil exportador, se mostró preocupado por «las alteraciones de la producción debidas a la agitación» y afirmó que la violencia de los manifestantes significaba «un duro golpe a la industria de la confección de ropa». No había tiempo para declaraciones de consternación en relación con el siniestro de Savar, se imponía el pragmatismo. La política gubernamental bengalí suele oscilar en estos temas combinando adecuadamente el golpe de palo y la zanahoria. Así, se ahogó cualquier movilización que pudiera poner en peligro la continuidad de este sistema en Bangladesh, prometiendo modestos aumentos de los salarios mínimos —que después se cumplirían, o no— y una cierta tolerancia del sindicalismo, ya que, en caso contrario, no habrían podido homologar el régimen, ni siquiera a nivel de mínimos, con un sistema democrático y de libertades.

Una huelga de trabajadores en Bangladesh desató manifestaciones para reclamar que se aplicara el aumento del salario mínimo que el mismo Gobierno había aprobado, pero que no se hacía efectivo, para establecerlo en 3.000 takas (43 dólares), pero fueron sofocadas con tiroteos policiales en diciembre de 2013, con un saldo de cuatro muertos. En el trasfondo estaba el hecho de que, con el derrumbe del Rana Plaza, se había generado un deterioro de la imagen del país, y algunos consumidores empezaban a hacer preguntas. Había que proceder a un intento de lavado de imagen haciendo concesiones respecto a las condiciones laborales extremas y a la seguridad, pero sin aumentar los costes salariales de manera notoria, ya que los contratos de clientes emigrarían rápidamente hacia otros países de la zona. La Unión Europea exigió cambios en la situación laboral bajo la amenaza de suprimir las exenciones arancelarias que benefician los productos textiles procedentes de Bangladesh. La Administración de Barack Obama suspendió el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP), un plan de ayuda al desarrollo del país, dada la falta de garantías de que se respetaran los derechos de los trabajadores bengalíes. Este era el precio por el escándalo destapado con el siniestro del Rana Plaza. La presión occidental fue incluso matizada por los dirigentes de las precarias organizaciones sindicales del país, como fue el caso de Amirul Haq Amin, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Textil de Bangladesh, los cuales, a pesar de abogar por una mejora de los salarios y la seguridad de las instalaciones, no han querido poner en peligro los cuatro millones de puestos de trabajo que este durísimo sistema conlleva. Consideran, y no sin cierta razón, que la alternativa, es decir, el desempleo, es mucho peor. Como afirma un dirigente patronal bengalí: «Es hipócrita, por parte de los países que compran nuestros productos, demandar la mejora de las condiciones laborales y, al mismo tiempo, exigir precios bajos». El contrasentido económico y social de este sistema resulta bastante claro.

Y es que, en este mundo de los costes mínimos, el caso del Rana Plaza no es una excepción sino una norma, al igual que su derrumbe no fue fruto de casualidades imponderables.

La siniestralidad y los accidentes tienen antecedentes próximos a lo que sucedió el 24 de abril de 2013. El 24 de noviembre de 2012, las llamas devoraron la fábrica Tazreen Fashisons, situada en Ashulia, una zona suburbana de Daca cercana a Savar, ciudad que cuenta justamente con una zona industrial de producción textil destinada a la exportación y en donde los meses anteriores se habían producido las mayores movilizaciones de trabajadores pidiendo mejoras en las condiciones y los salarios, con huelgas y saqueos de fábricas que comportaron una durísima represión. En el incendio de Tazreen murieron 124 personas, también la mayoría chicas, que no pudieron escapar de las llamas debido a una circunstancia muy común en estas factorías, el hecho de que las puertas estén cerradas con candados durante las horas de trabajo con el fin de evitar posibles fugas de las trabajadoras. A pesar de esta gravísima negligencia, la empresa se negó a pagar indemnizaciones a las familias afectadas e incluso rehusó asistir a una reunión en Ginebra, convocada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con el fin de evaluar la situación. En Tazreen se trabajaba en ese momento en la producción de ropa para Wal-Mart, Sears y Disney. Los miles de trabajadores que se manifestaron indignados a raíz de este suceso no consiguieron más que golpes de la policía y del ejército de Bangladesh. El 29 de enero de 2013, aún ardió otra fábrica textil, esta vez Smart Exports, con siete mujeres calcinadas por las mismas razones que en el caso de Ashulia. La fábrica producía en aquel momento para las marcas Bershka y Lefties, del grupo español Inditex, además de para la alemana KIK y las francesas New Look, Scott&Fox e Invest Solo. Tampoco hubo consecuencias más allá de la indignación de la población.

A pesar de las complicidades gubernamentales con este sistema de producción casi esclavista, así como con las ilegalidades urbanísticas cometidas por el propietario del Rana Plaza, la muerte de más de mil personas tenía demasiado calado como para no verse obligados a hacer algún gesto de autoridad. El nivel de irritación de los trabajadores del sector y de la población en general podía inducir a una revuelta violenta de carácter global. En este contexto, la policía y el ejército se apresuraron a

anunciar la exigencia de responsabilidades a los fabricantes y al propietario del edificio derrumbado, los cuales fueron detenidos, aunque a Sohel Rana no se le pudo capturar hasta cuatro días después, en plena huida y cerca de la frontera con India. También fueron detenidos dos ingenieros municipales, los cuales habían certificado la solidez y seguridad del edificio siniestrado. Aunque era miembro del partido gubernamental, las autoridades empezaron a marcar distancias oficialmente con Sohel Rana. El presidente del Consejo de Savar, Firoz Kabir, dijo de él que era un matón y un gánster conocido en la zona. Este reconocimiento llegaba muy tarde.

Para el observador pueden resultar curiosas las complicidades del Gobierno de Bangladesh con un sistema productivo con tanta carga de explotación humana, especialmente atendiendo al hecho de que quien gobierna es una coalición de izquierdas liderada por la Liga Awami, grupo que ha sido el polo de referencia laico y progresista desde la independencia de 1971, liderado por Sheik Hazina Wazed, actual presidenta del país e hija de uno de los líderes más carismáticos de la guerra de separación de Pakistán. De hecho, los veinte años posteriores a la segregación fueron convulsos y dominados por golpes de Estado militares. Sólo a partir de 1991 se puede hablar de un régimen formalmente democrático, en el que se han alternado en el poder el Partido Nacional de Bangladesh, conservador y confesional, liderado por Khaled Zia (curiosamente también hija de otro de los dirigentes de la independencia), y la Liga Awami, que gobierna desde 2008 con la abrumadora mayoría obtenida para la Asamblea Legislativa, con 230 diputados de un total de 300. La estrategia de proteger la industria textil ha sido compartida por los dos grandes partidos, como también han aceptado ambos ser rehenes de quien realmente gobierna el país, los grandes propietarios agrícolas y los industriales exportadores.

Las condiciones establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) también han tenido mucho que ver con la evolución que ha seguido Bangladesh, un país tan pobre y tan interesante para las empresas multinacionales desde el momento en que apostaron por desmantelar sus fábricas en Occidente en

busca de mano de obra extraordinariamente barata y flexible. Las estructuras políticas del país son prisioneras de un sector que representa el 80 por ciento de sus exportaciones y más de cuatro millones de puestos de trabajo. No hay espacio para huelgas y movilizaciones de los trabajadores, ni para mejorar las condiciones laborales y los salarios de manera significativa. Bangladesh se ha convertido en el segundo mayor exportador mundial de prendas, después de China, pero sigue siendo el segundo país más pobre del mundo, sólo superado por Haití.

El tema de la toxicidad de los entornos laborales textiles y el del uso de sustancias peligrosas en la fabricación son otros aspectos negativos de todo esto. A mediados de 2011, Greenpeace elaboró un informe con el elocuente título de «Trapos sucios», en el que, tras analizar los restos de productos químicos de conocidas marcas de ropa occidental, aseguró haber encontrado que en catorce de ellas había sustancias peligrosas como el nonilfenol etoxilato (NPE), un producto químico sintético, de toxicidad persistente y que provoca trastornos hormonales. Buena parte de las prendas de ropa de marcas como Abercrombie, Adidas, Calvin Klein, Converse, G-Star Raw, H&M, Kappa, Lacoste, Li Ning, Nike, Puma o Ralph Lauren, tenían restos de esta sustancia química que, en su fabricación en China, formaban parte del cóctel de sustancias químicas vertidas en los deltas de los ríos Yangtzé y Perla, pero que, al ser lavadas por los consumidores, afectan también a las aguas residuales de sus países. La campaña iniciada por Greenpeace al respecto, llamada Detox, provocó que marcas como Nike o Puma hicieran público su compromiso de eliminar todos los vertidos de sustancias peligrosas de su cadena de suministros y de sus productos. Otras muchas, no hicieron ni eso.

Greenpeace también elaboró un informe demoledor sobre la ropa y los juguetes vendidos bajo el sello Disney, «Ropa tóxica, marca Disney», en el que revelaban que la mayoría de piezas analizadas contenían sustancias químicas peligrosas, especialmente en sus estampados, para los que se utiliza material de PVC, el cual podría tener efectos nocivos en la salud de los niños, especialmente a largo plazo.

El Rana Plaza y los talleres textiles de Bangladesh son la consecuencia del proceso globalizador de la economía que se impulsó desde los años noventa del pasado siglo, con mercados mundiales desregulados, ya fuera de forma voluntaria o bien forzada; la fe en la eficiencia de los mercados daba a entender que este proceso supondría una fuente de oportunidades para países extraordinariamente pobres, que ahora podrían evolucionar hacia la categoría de países en vías de desarrollo. Es evidente que el lenguaje lo soporta todo. La dureza de las condiciones de producción actuales, así como los salarios de miseria, serían el requisito para arrancar tal proceso de industrialización. Así lo entendía el pensamiento neoliberal en su afán por encontrar únicamente virtudes en la desregulación. Argumentaban que, aunque inicialmente la riqueza en estos países sólo beneficiara a unos pocos, no tardarían en mejorar las condiciones de todos. La riqueza, afirmaban, se derramaría de la parte alta de la pirámide hacia su base a medida que se consiguieran condiciones de trabajo decentes. Argumentaban que sólo era una cuestión de tiempo, tal y como había sucedido en la Gran Bretaña decimonónica. La diferencia, aquí y ahora, es que cualquier redistribución de riqueza comportaría que los pedidos se fueran a otro país. Con rentas salariales de unos treintaiocho dólares mensuales y casi sin pagar impuestos gracias a las ZPE, Bangladesh continuará quedando a la cola del desarrollo. Al final, no se habrá producido el famoso *take-off* británico, un arranque industrial que se mantenga como proceso de desarrollo autosostenido. Bangladesh es un país prisionero de una actividad que le reporta el 70 por ciento de sus exportaciones, el 17 por ciento de su raquítico PIB y un negocio de 15.000 millones de euros cada año. Las empresas españolas Inditex y Mango, para las que se trabaja en ese país, afirman que ellos operan con plazos y volúmenes razonables y que tienen terminantemente prohibido a sus proveedores que subcontraten sin su permiso. La realidad, sin embargo, es que los proveedores, cuando están colapsados por los plazos de entrega, subcontratan en condiciones inimaginables. Las marcas están lejos, y ni controlan ni quieren saber cómo se produce, sólo les interesa el precio, la calidad y las fechas de entrega.

La paradoja de este proceso es que los consumidores de Occidente que se benefician de esta moda asequible gracias a los bajos salarios de Bangladesh son aquellos a quienes justamente los trabajadores de Bangladesh están dejado sin trabajo en sus países. Nadie en el mundo occidental trabajaría por salarios tan insuficientes e indignos, pero nos beneficiamos de que otros lo hagan, ya que ellos no se pueden permitir el lujo de decir que no. Quizá podamos continuar comprando algunas prendas de moda baratas, mientras nuestro Estado del Bienestar no haya sido liquidado y continuemos cobrando las prestaciones por desocupación. ¡Triste perspectiva! Los que creen en la inexorable mejora de la capacidad adquisitiva de los trabajadores de los «talleres del sudor» argumentan que, de aquí a unos años, también ellos tendrán acceso a los productos baratos que ahora manufacturan, y que, entonces, se fabricarán en remotos talleres africanos. En el mejor de los casos, lo que no va a desaparecer es la explotación que lo hace posible, la cual tan sólo irá desplazándose en la esfera global.

Las organizaciones sindicales y las oenegés que denuncian esta situación calculan que el salario mínimo de subsistencia tendría que ser en estos momentos de sesenta dólares mensuales en Bangladesh, en lugar de los menos de cuarenta dólares que cobran ahora. Por debajo de los sesenta dólares mensuales aún hay muchos lugares donde poder producir. Justamente por esto, tanto el liberal-conservadurismo hegemónico como una cierta izquierda justifican este sistema productivo y sus condiciones aberrantes, en la medida que la opción se plantea entre estas fábricas, o bien ningún tipo de fábrica. En el campo, el salario no llega al dólar diario, que es el umbral que las organizaciones internacionales han establecido para fijar la pobreza extrema. Por esto, según argumentan algunos, los trabajadores bengalís están dispuestos a aceptar «opciones diferentes en el espectro riesgo-recompensa», como afirma el periodista y bloguero liberal estadounidense Matthew Yglesias en la revista *Slate*. Según esta visión, los accidentes laborales y las muertes en las fábricas serían un sacrificio aceptado por los trabajadores. Resultan una «elección racional» ante alternativas peores, tal y como lo plan-

tea el periodista escocés Alex Massie en *The Spectator*. Para las marcas, el aspecto clave es mantenerse distante de todo esto, no fuera el caso que acabara por afectar su reputación y los consumidores se diesen cuenta de que los valores que transmiten en sus campañas de marketing son poco más que una mascarada. De las decisiones que se toman en las complejas cadenas de suministro, ni tan siquiera tienen que responder delante de sus accionistas. No hay que buscar responsables individuales a esta situación, ni tampoco es el resultado de una conspiración organizada por las grandes corporaciones que dominan el mercado textil a escala mundial. Sólo es negocio. Es el resultado de una lógica económica que, a pesar de ser perversa y absurda, se desarrolla fuera de ningún tipo de control político y social. Sohel Rana es un eslabón de esta inmensa cadena de despropósitos. Como diría Hannah Arendt, ahora que se ha recuperado su figura intelectual a través de una magnífica película biográfica, es la banalidad del mal, ejercido y practicado por personas grises y anodinas, siguiendo la lógica de una cadena que es, en esencia, criminal.